



LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente: CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS

En el juicio por cumplimiento de contrato de compra venta, interpuesto en la Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado de Bolívar con sede en Puerto Ordaz, por el ciudadano **CARLOS FRANCISCO GARCÍA**, venezolano, titular de la cédula de identidad número V- 11.515.328, representado por David de Ponte y Jaime Daniel Martínez Mila, inscritos en el Instituto de Abogados (I.P.S.A.), bajo los Nros. 9.637 y 226.461 respectivamente, contra la ciudadana **MILJEVIC**, venezolana, titular de la cédula de identidad número V-8.859.263, por los abogados Yajaira Seijas, Raúl Carrillo y Carlos Pernía Arellano, inscritos en el Instituto del Abogado (I.P.S.A.) bajo los números 15.155, 90.755 y 63.089 respectivamente, en la Sala Mercantil y de Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia el 11 de mayo de 2017, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa opuesta a la demanda por falta de cualidad de la parte demandante y confirmó así la decisión proferida por el *a quo*.

Mediante diligencia de fecha 14 de diciembre del año 2017, la parte demandante interpuso recurso de casación, el cual fue admitido el 16 de enero de 2018 y formalizado tempestivamente.

En fecha 14 de marzo de 2018, la representación judicial de la parte demandante interpuso impugnación del recurso de casación. No hubo réplica.

En fecha 22 de marzo de 2018, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia al Sr. Ramón Velázquez Estéves. Posteriormente, en virtud de la designación de principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, realizada por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 27 de abril de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del 27 de abril de 2022), así como de la elección de la Junta Directiva del Máximo Tribunal en sesión de fecha 27 de abril del mismo año, se reasignó la ponencia a la **CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS**, quien con tal carácter la suscribe.

Cumplidas las formalidades legales, pasa la Sala a dictar su máxima decisión de la Magistrada quien con tal carácter la suscribe y lo hace previa las siguientes consideraciones:

PUNTO PREVIO

En fecha 14 de marzo de 2018, el representante judicial de la parte Secretaría de esta Sala de Casación Civil, escrito de impugnación a la formaliza de casación ejercido por la parte actora, solicitando lo siguiente:

“...De manera preliminar solicito que esta honorable Corporación (si los abogados Raúl Carrillo, titular de la cédula de identidad Nro. V el Inpreabogado bajo el Nro. 90.755, y Carlos Pernía Arellano, identidad Nro. V-11.032.753 e inscrito en el Inpreabogado bajo habilitados para actuar ante la Sala Civil como exige el artículo Procedimiento Civil.

*Para el caso de que los mencionados profesionales no aparezcan in-
lleva la Sala (sic) pido que se declare no presentada la formalización
casación. Hemos de recordar que la sentencia N° 916 del 15-
requisitos necesarios para actuar ante esta Sala además de o:
condición de abogado, la inscripción en el registro de profesional
esta Máxima (sic) Instancia (sic) Civil (sic)...” (Negrillas y cursivas)*

El impugnante solicita que esta Sala tenga como no presentado el escrito extraordinario de casación ejercido por la parte demandada, por cuanto no c

estipuladas en el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil.

Vista la petición del impugnante, resulta pertinente precisar que de confor

artículo *in comento*, para formalizar y contestar el recurso extraordinario de casa

en los actos de réplica y de contrarréplica ante la Corte Suprema de Justicia, hoy

correspondía a los abogados en ejercicio, entre otros requisitos, estar debidamer

Casación Civil pues, en caso de no constar dicha inscripción, se tendrían como no

Sin embargo, en sentencia de esta Sala de Casación Civil, cuyo contenido es el siguiente: “Se declara que la Sala de Casación Civil, al decidir, en decisión N° 916 de fecha 15 de diciembre de 2016, caso *Instituto Nacional de Seguros v. Juan Carlos Rodríguez*, analizó el contenido de la referida norma de conformidad con los postulados constitucionales de la igualdad ante la ley, la justicia y el debido proceso y, en tal sentido, se estableció lo siguiente:

“Esta Máxima Instancia Judicial de la República Bolivariana de

través del cual, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, y sin formalismos o reposiciones inútiles, esta Máxima Instancia reconoce la obsolescencia contenida en la citada norma contenida en el Código de Procedimiento Civil, el cual se encuentra en franco desacato a la novísima Constitución, y en atención al caso sub examine, acuerda, de referida norma procesal, la cual tendrá efectos ex nunc a la entrada en vigencia de la nueva doctrina que acoge esta Máxima Instancia Civil proceder a realizar cualquier acto procesal ante esta Sala de Casación Civil sin necesidad de cumplir con otro requisito adicional distinto al de ser profesional del derecho, o por los Magistrados integrantes de esta Sala por asegurar con preferencia la vigencia de nuestra Carta Política...”. (Resaltado del texto).

Consecuentemente, la Sala Constitucional, conociendo de la precitada sentencia, declaró parcialmente inaplicable el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, ratificado por la Sala IV del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 831 de fecha 27 de octubre de 2017, caso *Francisca Alicia Venavere*, con la siguiente fundamentación:

“...Por tanto, esta Sala Constitucional comparte el resultado de la decisión del 15 de marzo de 2017, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, así como también los razonamientos empleados en la justificación de dicho fallo, toda vez que, tal como se indicó supra, al declarar la inaplicación del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, derivaría, a la vista de las circunstancias que rodean el presente caso, consecuencias irremediablemente perjudiciales para la justicia, por lo que se declara.

*Con base en los planteamientos expuestos a lo largo del presente fallo, así lo declara, **CONFORME A DERECHO** la desaplicación por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, efectuada el 15 de marzo de 2017, en el caso de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, según la cual actuar ante esta Sala de Casación Civil a los profesionales del derecho que no reúnan los requisitos 1.- un mínimo de cinco (5) años de graduado, 2.- ni la condición de doctor en alguna rama del derecho, judicatura o docencia, o la acreditación expedida por el Colegio de Abogados que los habilite para actuar en la Sala de Casación Civil’...”. (Cursivas, negrillas, subrayado y mayúsculas del texto).*

En consecuencia, declarada como fue la desaplicación por control difuso del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, y considerase que los requisitos previstos en dicha norma para el acceso al recurso de casación que carecen de toda justificación razonable para ser exigidos, el escrito presentado por los profesionales del derecho Raúl Carrillo y Carlos Perni, en fecha 14 de febrero de 2018, **se tendrá como válidamente presentado**, y así se establece.

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICO

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 313 Civil, se delata la infracción en la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5º e de incongruencia positiva. En relación con el vicio delatado, el formalizante expone:

“...La recurrida incurre en el vicio de incongruencia y por tanto declarar ilegalmente con lugar la pretensión del actor, concede a su escrito libelar.

En efecto, consta del libelo de demanda, capítulo sexto, que el petitorio es el siguiente:

*‘...demando a: **Adriana Romero de Miljevic**, (...). A los fines de que el Tribunal (sic) en que*

*A. Constituímos dos sociedades mercantiles, **Promociones Aroma C.A.**, con idénticos objetos sociales, traducidos en la comercialización de productos de belleza y MAC en cada una de sus sedes, con un capital social de Bs. 20.000 acciones de Bs. 1,00, poseyendo **Adriana Romero de Miljevic** el equivalente al **capital social, 12.000 acciones** en cada caso, y **Carlos Pini Hernández** el **capital social, 8.000 acciones** en cada sociedad mercantil.*

*B En diciembre del 2012, Adriana Romero de Miljevic y mi representado acordaron extinguir el vínculo existente entre ambos, producto de la extinción de **PROMOCIONES AROMA C.A.**, y, **CIMA 09 C.A.**, acordando que **Promociones Aroma C.A.** quedarían para la única y exclusiva de **Adriana Romero de Miljevic**, y, las de **Cima 09 C.A.** para **Carlos Pini Hernández**, compensar este último a **Adriana Romero de Miljevic** la diferencia en función del valor de cada empresa y la mayor participación igualmente que se tomaba como fecha de la separación accionaria del 2012.*

*C. Como efecto de la extinción del vínculo societario ante la extinción de **Promociones Aroma C.A.**, **Hernández** quedó obligado en pagar, y debe, a **Adriana Romero de Miljevic** en función del valor patrimonial de ambas empresas y la posición que **Hernández** tenía en las citadas empresas para la fecha del acuerdo de extinción de **doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco céntimos (Bs. 234.445,27)**, resultado de restar a la participación de **Miljevic** en **Cima. 09 C.A.**, (Bs. 646.222, 71), la que poseía en **Promociones Aroma C.A.**, (Bs. 411.777,44).*

*D. En fecha 1 de octubre del 2012 mi representado le traspasó a **Adriana Romero de Miljevic** la sociedad mercantil **Promociones Aroma C.A.**, comenzando la vigencia del contrato contractual al cual habían llegado previamente para la rescompra de la propiedad de las acciones de **PROMOCIONES AROMA C.A.** y **CIMA 09 C.A.***

*E. En consecuencia debe traspasar a **Carlos Pini Hernández** la participación que posee en la sociedad mercantil **Cima 09 C.A.** inscrita, ante el Jefe de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en **Porlamar**, el 3 de noviembre del 2009, bajo el Nro. 72, Tomo 1, en el pago de **doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco céntimos, (Bs. 234.445,27)**, monto el cual mi representado le traspasó formalmente por este acto, mediante cheque de gerencia de **Adriana Romero de Miljevic** en demanda, a los fines de evitar que pueda alegar la excepción de contrato no cumplido, llamada también excepción de contrato no cumplido.*

obligaciones cuando su contraparte le exige el cumplimiento sin con su propia obligación (sic).

F. Que el aumento de capital realizado el 5 de junio del 2014 Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado N de junio del mismo año, bajo el Nro. 6, Tomo 71-A, en su co 12.000 acciones en la sociedad mercantil Cima 09 C.A., con Accionistas, aumentando el capital de la sociedad mercantil Ci de ciento veinte mil bolívares, (Bs. 120.000,00), suscribiendo acciones emitidas para dicho aumento, a pesar de haber sido p fue un hecho simulado destinado a desconocer la obligaci Francisco Pini Hernández, contraviniendo y desconociendo l de traspasar las 12.000

acciones que poseía en Cima 09 C.A., y como efecto de ello c efecto alguno, quedando a salvo el derecho de que Cima 09 C.A de cien mil bolívares, (Bs. 100.000,00), que supuestamente pag citado aumento de capital.

G. Se le condene en COSTAS de conformidad con la Ley...'

Consta de la recurrida, que el ad quem, concedió al demandante lo '...como hecho sobrevenido al 9 de diciembre de 2012, e igu entre las partes, que el 5 de junio de 2014 (...) Adriana Romer en asamblea de accionistas de Cima 09, C.A., aumentó el c mercantil a Bs. 120.000,00, suscribiendo las 100.000 accio pagando su valor de Bs. 100.000,00, por lo que este Juzgador la voluntad de las partes, manifestada el 9 de diciembre del 2 HERNÁNDEZ quedara como el único titular de la totalidad de C.A., y como contrapartida que ADRIANA ROMERO PROMOCIONES AROMA, C.A., la obligación de esta c demandante es la de traspasarle **NO SOLO LAS 12.000 ACCI EL LIBELO DE LA DEMANDA, SINO TAMBIÉN LAS 10 SUSCRIBIÓ LUEGO DE ASUMIR SU OBLIGACIÓN**, es c acciones que posee en CIMA 09 C.A. a la fecha, 112.000 accion vez para CARLOS PINI HERNÁNDEZ de reintegrar a A. MILJEVIC, en el acto de traspaso de las acciones de Cima referido aumento de capital suscrito, la cantidad de Bs. 100.00 hacerlo se constituiría un enriquecimiento sin causa a su favor, De los extractos parcialmente transcritos se evidencia, Ciudadanos ad quem, al ordenar a mi representada traspasar al accionante (12.000) acciones que tenía a su favor en Cima 09, C.A., las cie que adquirió legalmente producto de un aumento de capital ac general extraordinaria que cumplió con todas las formalidades (sic) Sociales (sic) de la sociedad mercantil y por el Código de **MÁS** de lo peticionado por el demandante en su libelo de deman legal de decidir de forma, expresa, positiva y precisa con arreglo a a las excepciones o defensas opuestas..." (Negritas y subrayado de

Para decidir, la Sala observa:

En la presente denuncia, el formalizante delata que la recurrida incurri positiva, al condenar a la parte demandada a traspasar, en favor de la parte den acciones que detentaba en la sociedad mercantil Cima 09 C.A. sino también las

y pagó la demandada como consecuencia del aumento realizado en asamblea general posterior al contrato cuyo cumplimiento se pretende en el presente juicio.

Antes de verificar los alegatos de la parte recurrente, se considera oportuno con el vicio de incongruencia positiva, esta Sala en fallos N° 6, de fecha 17 de febrero de 1999-472, caso *Carlos Martin Ramos*; RC000123, de fecha 29 de marzo de 1999-472, caso *Marciano Martínez*; y RC000390, de fecha 21 de junio de 2017, caso *Marga Enríquez* lo siguiente:

“...En efecto, el vicio de incongruencia positiva surge cuando el decisor decide sobre lo no sometido a su consideración, cuando la sentencia va más allá de ‘solo lo alegado por el actor’ y, en materia de apelación, cuando la sentencia decide sobre lo no planteado. ‘Quiere la ley que la decisión definitiva e indubitable sino que guarde relación o consonancia con la pretensión del actor y con los términos en que fue planteada la demanda’...”. (Sentencia del 20 de enero de 1999, caso: Manuel Peña)...”.

De conformidad con el criterio anteriormente transcrito, los jueces deben pronunciarse sobre aquellos alegatos sometidos a su consideración, según lo establecido en la demanda y en la contestación (también en los informes u observaciones de la parte demandada determinante en la suerte del juicio), sin exceder los límites fijados por los alegatos.

Ahora bien, en relación con los planteamientos del formalizante en la primera demanda, la parte actora en su escrito de la demanda, específicamente en el capítulo relativo a la demanda (artículo 19 de la pieza 1), demandó a la ciudadana Adriana Romero de Milijevic, para que por el tribunal de la causa, a traspasar en favor del demandante, Carlos Pini Hernández, la participación que aquélla detentaba en la sociedad mercantil CIMA 09, C.A., para el momento de la demanda.

Asimismo, se observa también que, en relación con las 100.000 acciones de la sociedad, en fecha posterior a la del referido convenio, en virtud de un aumento del capital general extraordinario, la parte actora consideró que dicho aumento se trató de una modificación que desconocía la obligación principal asumida en el convenio que supuestamente era otra sino la extinción del vínculo societario existente entre ambas partes.

Promociones Aroma C.A. y CIMA 09, C.A., mediante el traspaso y compensación de uno y otra para que cada quien fuese único propietario de una de las dos empresas.

Al respecto, el demandante pretende que el referido aumento de capital con el menoscabo del derecho de que la sociedad mercantil CIMA 09, C.A., reintegrada a la ciudadana Adriana Romero de Miljevic, la cantidad de cien mil bolívares, que suple el referido aumento.

Sobre tales pedimentos, el juez de la sentencia recurrida indicó lo siguiente (ver la pieza 2):

“...En el escrito de la demanda (...) CARLOS FRANCISCO PINI HERNÁNDEZ de seguida se sintetiza:

(...Omissis...)

Que en diciembre de 2012, por acuerdo al cual llegaron los citados accionistas ROMERO DE MILJEVIC y CARLOS PINI HERNÁNDEZ conviniendo a las prenombradas empresas (...) acordando que: las acciones de Aroma C.A. (sic) quedarían para la única y exclusiva propiedad de Adriana Romero de Miljevic y las de CIMA 09 C.A, (sic) para CARLOS PINI HERNÁNDEZ.

Que el 5 de junio de 2014 (...) ADRIANA ROMERO DE MILJEVIC, en su condición de poseedora de 12.000 acciones en la sociedad CIMA 09 C.A., constituida en asamblea de accionistas aumentó el capital de la sociedad a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 120.000,00) emitiendo cien mil acciones para dicho aumento, contraviniendo y desconociendo lo que tenía y tiene de traspasar las acciones que posee en CIMA 09 C.A. como efecto de lo convenido previamente.

(...Omissis...)

CARLOS PINI HERNÁNDEZ demandó a ADRIANA ROMERO DE MILJEVIC para que le traspasara las acciones que poseía en la sociedad mercantil CIMA 09 C.A. para la fecha de la demanda que constituía la totalidad de su participación en dicha sociedad para el 9 de diciembre de 2012, integrando así el 100% de las acciones que estaban a nombre del demandante CARLOS PINI HERNÁNDEZ.

Consta de autos, como hecho sobrevenido al 9 de diciembre de 2012, controvertido entre las partes, que el 5 de junio de 2014 (...) Adriana Romero de Miljevic, constituida en asamblea de accionistas de Cima 09, C.A., aumentó el capital de la sociedad mercantil a Bs. 120.000,00, suscribiendo las 100.000 acciones emitidas con un valor de Bs. 100.000,00, por lo que este Juzgador (sic) entiende que las partes, manifestada el 9 de diciembre del 2012, que CARLOS PINI HERNÁNDEZ como el único titular de la totalidad de las acciones en CIMA 09 C.A., que ADRIANA ROMERO DE MILJEVIC las de PROMOCIONES AROMA C.A. de esta ciudadana para con el demandante es la de traspasarle las 100.000 acciones señaladas en el libelo de la demanda, 100.000 acciones que suscribió luego de asumir su gestión en la sociedad CIMA 09 C.A. a la fecha, obligación a su vez para CARLOS PINI HERNÁNDEZ de reintegrar a ADRIANA ROMERO DE MILJEVIC la cantidad de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00) que le corresponden por el aumento de capital de la sociedad CIMA 09 C.A. a la fecha de la demanda.

De conformidad con lo previsto en el artículo 313, numeral 2° del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del artículo 1.387 del Código Civil por falsa aplicación.

El recurrente fundamenta su denuncia expresando lo siguiente:

“...Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la falsa aplicación del artículo 1.387 del Código Civil.

Establece la regla legal cuya infracción se denuncia aplicada falsamente.

(...Omissis...)

Ahora bien, la sentencia recurrida, establece:

*‘...Este convenio o acuerdo entre las partes es ratificado con los testimonios de los ciudadanos JORGE GIRALDO OQUENDO, folios 50 - 52, según el cual, al conocer a ambas partes; tener conocimiento de la relación comercial y que la relación consiste en la comercialización de las marcas MAC y CIMA, y los referidos en su testimonio acordaron separarse como socios de las empresas. Carlos Pini asumió en forma exclusiva la administración de CIMA y Carlos fue hace aproximadamente 4 años 2012 (sic), y al ser repreguntado de su testimonio, manifestó que conocía a ambas partes por haber trabajado en carpintería para el montaje de MAC en el C.C. Orinokia, así como PÉREZ, folios 71 al 73, segunda pieza, quien declara conocer a Romero de Miljevic, así como la relación comercial entre ambos, de cosméticos’; identificando el nombre de las tiendas como Porlamar; que acordaron separarse como socios de las mencionadas empresas. CARLOS se quedaba con CIMA y la señora ADRIANA con CIMA, contestando, al responder a las repreguntas que se le formularon a Romero de Miljevic de vista pero no de trato; la fecha de su separación ‘Diciembre 2012’, la fecha exacta, no, el tiempo no me acuerdo. En Orinokia, en mutuo acuerdo que estaban haciendo la separación de las empresas (sic), el señor CARLOS se quedaba con CIMA y la señora ADRIANA con CIMA. Ciudadanos Magistrados, no obstante que el supuesto de hecho de la infracción aplicada falsamente es inequívoco al señalar que la prueba de testigos no **PROBAR LA EXISTENCIA DE UNA CONVENCION CELEBRADA PARA ESTABLECER UNA OBLIGACION O DE EXTINGUIRLA, NI EL OBJETO EXCEDA DE DOS MIL BOLÍVARES**, la Alzada, haciendo aplicación de la disposición legal, fundamentó su ilegal decisión, en unas declaraciones en estricto jamás han debido ni siquiera admitirse.*

Como se puede apreciar, los hechos soberanamente establecidos por los testimonios de las partes, no corresponden al supuesto de la norma, pues en ningún caso a través de la prueba no puede probarse la existencia o extinción de una obligación cuando su monto concreto, sea superior a Dos Mil Bolívars (Bs. 2.000,00), por lo cual, la infracción del artículo 1.387 del Código Civil a una situación de hecho no previsto en la ley.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el ordinal 4° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, expresamos que las normas que el Tribunal (que no aplicó) para resolver la controversia, son los artículos 1.387 y 1.388 del Código Civil, que impiden declarar con lugar las demandas si a su juicio no existen pruebas alegadas; pruebas que según el sistema de distribución de carga de este caso al demandante, ya que en el petitorio de su libelo de demanda se alega la existencia de una obligación de traspaso de acciones a CIMA, que no corresponden al supuesto de la norma, pues en ningún caso a través de la prueba no puede probarse la existencia o extinción de una obligación cuando su monto concreto, sea superior a Dos Mil Bolívars (Bs. 2.000,00), por lo cual, la infracción del artículo 1.387 del Código Civil a una situación de hecho no previsto en la ley.

Para decidir, esta Sala observa:

De lo expuesto por el formalizante, se deja ver que delata la presunta falsedad al artículo 1.387 del Código Civil, razón por la cual enmarca su denuncia en el artículo 313 del Código Adjetivo Civil.

En tal sentido, sostiene que el juez de la recurrida violó dicha norma al demandar por cumplimiento de contrato con base en pruebas testimoniales que cuando el artículo 1.387 del Código Civil, señala que la prueba testimonial no prueba la existencia o extinción de una obligación cuando su valor sea superior a dos mil Bs.

Ahora bien, en relación con el vicio de falsa aplicación, esta Sala ha sostenido que este vicio se produce cuando el juzgador relaciona falsamente los hechos establecidos en los hechos supuestos previstos en la norma jurídica cuya consecuencia aplica en el caso. El juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en la norma.

Sobre el particular, en sentencia número RC 61, de fecha 12 de agosto de 2010, *S.A.C.A.*, se estableció que “...*En cuanto a los motivos que generan la denuncia, el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 2º prevé, ...la falsa aplicación de la norma, la cual supone la aplicación efectiva de una norma que ha realizado el juez, a una situación de hecho que no es la que ésta contempla...*”.

Ahora bien, en la denuncia sometida a examen se observa que la parte denunciante indicó que al valorar la prueba de testigos, el juez hizo “...*caso omiso...*” a la denuncia por lo que esta Sala interpreta que el vicio realmente delatado es el de falta de aplicación de la norma, en el sentido, que el juez no se dio cuenta de que conoce la prueba testimonial.

Esta Sala ha sostenido que el vicio de falta de aplicación se configura cuando el juez no aplica una norma jurídica expresa, vigente, aplicable y subsumible, la cual resulta idónea para resolver la controversia planteada, dando lugar a una sentencia injusta y susceptible de nulidad. En consecuencia, si se cambia esencialmente el dispositivo en la sentencia (Vid., sentencia número 49 de 2010, caso: **Ana Faustina Arteaga y otras, contra Modesta Reyes y otros**).

Para una mejor comprensión, esta Sala se permite citar el contenido de la norma

“Artículo 1387: *No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguir el objeto exceda de dos mil bolívares.*

Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención con los bienes públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se otorgó en el tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor superior a dos mil bolívares.

Queda, sin embargo, en vigor lo que se establece en las leyes especiales.
(Resaltado de la Sala).

De conformidad con el artículo citado, constituye causal de inadmisibilidad en el ámbito de las relaciones contractuales personales, que el objeto de la prueba sea una convención cuyo objeto tenga un valor superior al de dos mil bolívares, excluyendo las convenciones de naturaleza mercantil, las cuales se regirán por las leyes especiales.

En relación con la referida prueba de testigos, el juez de la recurrida estableció (pieza 2):

“...Este convenio o acuerdo entre las partes es ratificado con los testimonios de los ciudadanos JORGE GIRALDO OQUENDO, (...) quien declara que los ciudadanos referidos en su testimonio acordaron separarse de las mencionadas empresas; que Carlos Pini asumió en forma exclusiva la gestión de Cima; que la fecha aproximada fue hace aproximadamente 4 años atrás, rendido por DEYANIRA PÉREZ, (...) quien declara conocer a Carlos Pini, así como la relación comercial entre ambos, (...) que los señores socios de las mencionadas empresas, ‘Si (sic), el señor CARLOS PINI y la señora ADRIANA con PROMOCIONES AROMA (...) la fecha de ‘Diciembre 2012’, (...) en mutuo acuerdo que estaban haciendo la separación, la fecha no la se (sic), el señor CARLOS se quedaba con CIMA y PROMOCIONES AROMA..’

De lo anteriormente transcrito, se puede observar que el juez de la recurrida basó sus conclusiones en los testimonios referidos y, en consecuencia, ratificó el hecho que ya había dado fe, como medio de prueba, es decir, la existencia del convenio suscrito entre las partes.

Por lo tanto, corroborado que el juez de alzada, efectivamente, valoró los testimonios para demostrar la existencia de un convenio, es necesario identificar la naturaleza de la prueba para poder establecer si el artículo en cuestión debía o no ser aplicado en el presente caso. Como se estableció en el último aparte de la norma, conforme a la cual “las leyes relativas a la materia de las obligaciones, preferiblemente al artículo 1.387 del Código Civil.

Así, del contenido del libelo de la demanda, (vid. folios 16 al 19 de la pieza) la actora pretende que le sean traspasadas las acciones de la sociedad mercantil CIM

En tal sentido, en cuanto a la compra y venta de acciones, el artículo 2 del

“...Artículo 2º Son actos de comercio, ya de parte de todos los con algunos de ellos solamente:

(...Omissis...)

3º La compra y la venta de un establecimiento de comercio y de las acciones de una sociedad mercantil...” (Negritas de la Sala).

Según lo anteriormente transcrito, el legislador califica la compra y venta de acciones como actos de comercio. Al respecto, el artículo 1 del Código de Comercio, literalmente expresa:

“...Artículo 1º El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.” (Negritas de la Sala).

De conformidad con lo anterior, los actos de comercio son regulados por el Código de Comercio, por lo tanto, la presente demanda, a todas luces, resta a la actora el beneficio de la prueba de la valoración de la prueba testimonial y, en consecuencia, la regulación de la valoración de la prueba testimonial contenida en dicha norma, la cual, en el artículo 128, señala:

“...Artículo 128. La prueba de testigos es admisible en los negocios en los que el importe de la obligación o liberación que se trate de acreditar, y la prueba por escrito, salvo los casos de disposición contraria de la ley.”

Así, se puede concluir que en los juicios de naturaleza mercantil, no es aplicable el artículo 1.387 del Código Civil, por lo que, contrario a lo denunciado por la actora, el juez de alzada no incurrió en el vicio delatado, por lo que se declara improcedente la demanda y se declara la inaplicación de dicho artículo. Así se decide.

II

De conformidad con lo previsto en el artículo 313, numeral 2º del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 320 *eiusdem*, se denuncia la infracción, por falta de fundamentación, de los artículos 1.159, 1.160, 1.161, 1.357, 1.359, 1.360 y 1.363 del Código Civil.

Al respecto el formalizante señala lo siguiente:

“...Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Comercio...”

violación de los artículos 1.159, 1.160, 1.161, 1.357, 1.359, 1.360 y por falta de aplicación.

Establece la sentencia recurrida:

'...En este orden de ideas las voluntades de las partes en el precitado e-mail de fecha 9 de diciembre del 2012 para la realización del traspaso de las acciones de Cima 09 C.A. para Carlos Aroma C.A. para Adriana Romero de Miljevic, con efecto a partir de la fecha en donde, Carlos Pini, para cumplir las obligaciones a su cargo, traspasó a Adriana Romero de Miljevic las 8.000 acciones que poseía en Promociones Aroma C.A. y, adicionalmente un pago establecido en función de la inversión accionaria en ambas sociedades mercantiles, y a su vez, como consecuencia de la inversión de Adriana Romero de Miljevic debía traspasar a Carlos Pini Hernández las acciones de Cima 09 C.A., es decir, Carlos Pini Hernández cumplió con su obligación en Promociones Aroma C.A., quedando pendiente el pago referido en la demanda en la cantidad de Bs. 234.045,27, sobre la base del inventario anexo al mismo, que le merecen plena prueba a este Juzgado... Omissis... (sic)

En conclusión este sentenciador observa que la parte actora no cumplió con el pago de la obligación que demanda, es decir que CARLOS PINI HERNÁNDEZ debe traspasarle las acciones que posee en CIMA 09 C.A. y, adicionalmente el pago de la demanda eran 12.000 acciones, habiendo recibido previamente 8.000 acciones que CARLOS PINI HERNÁNDEZ poseía en PROMOCIONES AROMA C.A., quedando pendiente el pago compensatorio por la diferencia de valor del valor de cada empresa y la participación accionaria en el patrimonio contenida en el inventario anexo al prenombrado e-mail de fecha 9 de diciembre de 2012, cuyo monto fue ofrecido a la demandada ADRIANA ROMERO DE MILJEVIC en la cantidad de Bs. 234.045,27, y para cuya determinación se resolvió por una experticia complementaria al presente fallo contenida en el referido inventario anexo al e-mail de fecha 9 de diciembre de 2012, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, de indexar dicho pago por el transcurso del tiempo desde la fecha 09 de diciembre de 2012, fecha en que debió ejecutarse cada una de las obligaciones asumidas por los accionistas, y así se decide...'

(...Omissis...)

Casación explica: "Es un principio general de jurisprudencia que la interpretación de la ley corresponde a los jueces de fondo, quienes son soberanos en esa apreciación, no entendiéndose de un modo absoluto, pues si bien la ley deja al criterio del juez la interpretación de la fuerza probatoria... no la deja a su arbitrio, toda vez que estas interpretaciones deben subordinarse...", (Cfr: GF n. 26, 1959, pág. 155).

Así, el artículo 1.359 del Código Civil, confiere a esa específica clase de hechos tanto a los hechos jurídicos que el funcionario declara haber efectuado como a los hechos de hecho que el funcionario declara haber visto u oído. Mientras que el artículo 1.363 eiusdem, le confiere a los hechos privados la misma fuerza probatoria que el instrumento público en materia de las declaraciones, hasta prueba en contrario.

La invocación de las anteriores normas jurídicas, expresas de valorar los hechos, por parte de los Magistrados de la Casación hasta el punto de descender al conocimiento de los hechos, que coadyuva la cita del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, no es correcta.

Al penetrar en el examen de esos instrumentos, y específicamente en diciembre de 2012, podrá verificar la Sala que contrario a lo señala aprecia del referido medio probatorio, de forma fehaciente, la obliga impone a nuestra representada el deber de traspasar acciones de demandante, mucho menos cuando según las disposiciones citadas c la venta es un contrato solemne que debe contener requis perfeccionamiento.

Ahora, la realidad es que el texto del referido e-mail, sólo demuestra partes en alcanzar un acuerdo, pero en estricto, no contiene esa instr modo, tiempo y lugar para concretar ese eventual acuerdo; el preci ambas partes, pues lo cierto es que sólo consta la manifestación u nuestra representada.

Si el Juez de la recurrida hubiera aplicado las reglas en cuesti contratos tienen fuerza de ley entre las partes, que deben ejecutar obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraí lugar la demanda por cuanto con independencia de dicho e-mail existe ningún medio probatorio en autos que demuestre el supuesto a partes, por lo tanto la infracción fue determinante en el dispositi pedimos sea declarado...”

Para decidir la Sala observa:

Alega el formalizante que el juez de la recurrida dejó de aplicar el co 1.160, 1.161, 1.357, 1.359. 1.360 y 1.363 del Código Civil, al momento de v electrónico de fecha 9 de diciembre de 2012 y establecer, en consecuencia, qu obligación de traspasar la titularidad de las acciones de su propiedad en la socie favor de la parte demandante.

Al respecto, añade que según las referidas normas, la venta es un contr requisitos esenciales para su perfeccionamiento, como son las condiciones de mo precio y el consentimiento de ambas partes, siendo que, a su parecer, en la r *manifestación unilateral de una de ellas*”, es decir, el consentimiento de la parte d

Finalmente, concluye que según las referidas normas, los contratos tiene deben ejecutarse de buena fe, y sus obligaciones deben cumplirse exactamente cc que considera que el referido instrumento no prueba ningún hecho y que tampoco autos que demuestre el supuesto acuerdo celebrado entre las partes, error en la v determinante en el dispositivo de la sentencia.

En relación con el vicio de falta de aplicación de una norma jurídica sostenido que se configura cuando el juez deja de aplicar una norma expresa,

sometido a examen, justamente cuando dicha norma resulta idónea para la planteada, dando lugar a una sentencia injusta y susceptible de nulidad, pues esencialmente el dispositivo en la sentencia. (Vid. sentencia N° 494 de fecha 2/12/2010, *Faustina Arteaga*).

Ahora bien, las normas del Código Civil, cuya infracción por falta de a establecen lo siguiente:

“...Artículo 1.159: Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.”

“Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligar a lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de equidad, el uso o la Ley.”

“Artículo 1.161.- En los contratos que tienen por objeto la transmisión de derecho, la propiedad o derecho se transmiten y se adquieren por el consentimiento legítimamente manifestado; y la cosa queda a riesgo y peligro del adquirente si no se haya verificado.”

“Artículo 1.357.- Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado por los jueces o legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.”

“Artículo 1.359.- El instrumento público hace plena fe, así entre las partes y respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º, de los hechos jurídicos que declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este funcionario no sea parte en el negocio.”

“Artículo 1.360.- El instrumento público hace plena fe, así entre las partes y respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes, del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos permitidos por la ley se demuestre la simulación.”

“Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por los jueces o legales por las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario de esas declaraciones.”

De conformidad con el contenido de las normas transcritas, los acuerdos celebrados obligan a las partes como si sus cláusulas fueran ley, en consecuencia, se encuentran expresado en ellos, entendiéndose que, en los casos de transmisión de propiedad, en que es manifestado el consentimiento.

Al respecto, se observa de las normas referidas, que se considerarán irrogantes si no han sido autorizados por un registrador, por un juez o por algún funcionario faci-

pública mediante el cumplimiento de las solemnidades legales pertinentes, los cuales son válidos en todas las partes y frente a terceros de su contenido.

Asimismo, dichas normas señalan que el instrumento privado reconocido como probatorio que el instrumento público, es decir, hace plena prueba, salvo prueba en contrario, en todas las partes como para terceros, en lo que se refiere a los hechos declarados por quienes los alegan.

Ahora bien, a los fines de resolver la presente denuncia, es oportuno citar sobre la convención cuyo cumplimiento pretende la parte demandante, observe lo siguiente:

*‘...En el literal 4 promovió e hizo valer el documento marcado como un i-mail (sic) enviado desde la dirección de correo de su representación. Con relación a la referida prueba se observa que la misma cursa por la vía de la prueba documental, el cual tiene fecha 09 de diciembre de 2012, y se valorará de acuerdo al estándar establecido en la Ley de FIRMA Y Datos Electrónicos, por lo que no es impugnado ni desconocido, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.151 del Código de Procedimiento Civil y del mismo se obtiene que con la redacción del documento había un convenio entre las partes, cuando se utilizan los siguientes correos electrónicos: el correo electrónico de la demandada envió, en fecha 09 de diciembre de 2012, un correo electrónico (...) a la dirección de correo electrónico de Carlos Pini, en el cual se indicó ‘...Hola Carlos (...) Anexo cuadro con la inversión de acciones de ambas empresas para que puedan revisar, **adicional a la conversación SOSTENIDA CON Carlos el 3-6-12 en el mueble e inmueble de la calle 10 de Mayo, Ordaz, donde se acordó el traspaso de acciones de CIMA por las acciones de PROMOCIONES AROMA para ADRIANA; donde se tocará hacer inventario de cada una de las tiendas y marcas (terminar el inventario en cada cuadro de cada empresa. cuadro (sic) de deuda de las tiendas y marcas (cada quien se hace responsable a partir de la fecha). De esa fecha en adelante se hace cargo de los pedidos, devoluciones, personal, etc. y se continuará la negociación 5-6-12, Queda pendiente firma del acta de la reunión y pendiente el pago del socio Carlos Pini de acuerdo a la inversión de acciones de Adriana Romero...**’. De lo que se evidencia unas obligaciones entre las partes de transferir la propiedad de las acciones de una empresa a la otra y la actora de transferir sus acciones de la otra empresa a la demandada, se evidencia un consentimiento del negocio discutido por ambas partes (...Omissis...)*

De todo el material probatorio vertido en autos este Juzgador (sic) en las actas procesales, que la pretensión del actor se basó en que Adriana Romero de Miljevic dos sociedades mercantiles, Promociones Aromas C.A., para la comercialización de las marcas Clinique y Macadamia, cada una de Bs. 20.000,00, representado por 20.000 acciones, de las cuales Adriana Romero de Miljevic tenía para la fecha de la demanda 12.000 acciones y Carlos Pini 8.000 acciones en cada una de ellas, en fecha 9 de diciembre de 2012, se estableció este vínculo de ser co-accionistas comunes, de tal forma que las acciones de Promociones Aromas C.A. y Cima 09 C.A., de Miljevic quedarían todas las acciones Promociones Aromas C.A. y Cima 09 C.A., traspasándose mutuamente las acciones de la otra sociedad mas una compensación que Carlos Pini Hernández de Miljevic Romero de Miljevic como diferencia de valor patrimonial por el valor de las acciones de la otra sociedad.

Carlos Pini Hernández fundamentó este convenio o acuerdo en diciembre de 2012 que le remitió Adriana Romero de Miljevic, negociación, y en el hecho de haber traspasado a Adriana Romero de Miljevic acciones que tenía en Promociones Aroma C.A., según documentos de 2012.

La apoderada judicial de Adriana Romero de Miljevic, ratificando sus pruebas, lo cual constituye a la luz de este Juzgador (sic) una alegato por la parte actora de que en la referida fecha ambos separación como socios comunes en Promociones Aroma C.A. y Cima

Igualmente reconoció la parte demandada que el 1 de octubre de 2012, Carlos Pini Hernández traspasó a Adriana Romero de Miljevic 8.000 acciones de Cima C.A.

Habiendo admitido ambos hechos, incluso reproduciendo en su texto del referido e-mail del 9 de diciembre de 2012, negó que el contenido del citado e-mail del 9 de diciembre de 2012 formen o constituyan cuerpo de prueba por el cual Carlos Pini Hernández pueda pretender el cumplimiento de su demanda.

La demandada, tanto a través de su escrito de contestación de la demanda como en sus pruebas, dio como hecho admitido el contenido del e-mail del 9 de diciembre de 2012, de cuyo contenido se desprende, inequívocamente, una conversación sostenida con Carlos el 3/6/12 en el mueble de Cima donde se acordó el traspaso de acciones de Cima a Carlos Pini para Adriana; se tocaron los siguientes puntos: Hacer inventario de acciones y marcas (terminados el 5/6/12) (sic) colocados en cada cuadro de la sala; a partir de esa fecha en adelante cada socio se hace cargo de los pedidos, de los pagos y de las marcas (sic) Se toma como fecha de negociación el día 5/6/12. ... Queda pendiente la convocatoria a Asamblea extraordinaria... Pendiente el pago del socio Carlos Pini por inversión inicial...'

(...Omissis...)

Resulta indispensable para este operador de justicia hacer un breve recordatorio de lo que se entiende como fuente de las obligaciones, teniéndose como tales a los hechos susceptibles de ser origen de un vínculo obligacional, y el contrato. El artículo 1.133 del Código Civil, es una convención entre dos o más personas en virtud de un concurso de sus voluntades para la realización de determinado fin lícito, el cual se traduce en constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir un vínculo jurídico mediante el cual se promete una prestación o el cumplimiento de una obligación.

El contrato no es otra cosa que un acuerdo de voluntades que crea obligaciones a las partes que lo suscriben, es un acto jurídico en virtud del cual se crean obligaciones y genera vínculos entre las personas y es el instrumento más apto para regular relaciones económicas y pecuniarias siendo su carácter eminentemente patrimonial. Las partes producen efectos obligatorios por haberlo consentido.

De acuerdo con el artículo 1.141 del Código Civil, para la existencia de una convención se requiere del consentimiento de las partes, que el objeto de la materia del contrato, y de una causa lícita, y conforme al 1.142 es necesario que no sea anulado en función de la incapacidad legal de alguna de las partes.

De lo anteriormente transcrito se observa que el juez de la recurrida, al electrónico de fecha 9 de diciembre de 2012, promovido por la parte actora en for la demandada, así como con el resto del acervo probatorio, estableció los sigu actora, Carlos Pini Hernández, conjuntamente con la parte demandada, A constituyeron dos sociedades mercantiles denominadas: Promociones Aroma C.A una de estas sociedades mercantiles contaba con un capital social Bs. 20.00

las sociedades mercantiles, mientras que Carlos Pini Hernández tenía acreditada la firma. **fecha 9 de diciembre de 2012 se hizo constar el convenio de extinguir el vínculo entre ellas y que dicho convenio comenzó a surtir efectos desde el 5 de junio del 2012.** En virtud de dicho acuerdo, Adriana Romero de Miljevic quedaría como propietaria de toda la sociedad mercantil Promociones Aroma C.A. y Carlos Pini Hernández quedaría como propietario de la sociedad Cima 09 C.A., 6) Que para lograr tal fin, ambos se traspasarían mutuamente las acciones de las respectivas sociedades mercantiles; 7) Que Carlos Pini Hernández pagaría, a favor de Adriana Romero de Miljevic, una compensación como diferencia de valor patrimonial de las acciones de la demandada que contaba con mayor participación accionaria en ambas sociedades, la cual estimó que debía ser fijada sobre la base en el inventario anexo al citado correo electrónico.

Ahora bien, en relación con la valoración de los correos electrónicos, la Sala IV de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia N° 498, de fecha 8 de agosto de 2012, estableció que la misma “...se rige por la normativa prevista en el Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Electrónicas y por el Código de Procedimiento Civil, texto legal aplicable por razón de tiempo y lugar del referido Decreto-Ley...” (Vid. sentencia N° 498, de fecha 8 de agosto de 2012, en el caso: Grupo de Empresas Moon, C.A. contra Alfa Cocina, C.A.,).

En tal sentido, el artículo 4 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Electrónicas establece lo siguiente:

“...Artículo 4.- Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 1 de la Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba se regirán por lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil.

La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en forma impresa, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.

De conformidad con el contenido de la referida norma, los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que las pruebas documentales, destacando que en aquellos casos en los que los mensajes de datos sean reproducidos e incorporados en el expediente en formato impreso, tendrán la eficacia probatoria de las pruebas fotostáticas.

Por su parte, en relación con la eficacia probatoria de las pruebas fotostáticas, el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, señala que éstas “...se tendrán como fidedignas sin necesidad de corroboración por el adversario...”, equiparándose así, a los instrumentos privados reconocidos como tales por el juez.

Asimismo, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a privados, señala que el silencio de la parte contra quien se produzca como *reconocido el instrumento...*”.

Ahora bien, en relación con los documentos privados, el artículo 1.368 de “...*deben estar suscritos por el obligado...*”, es decir, deben estar firmados por pretenda exigir una obligación.

En este sentido, el requisito de suscripción regulado por el Código Civil, datos equiparables a documentales privadas por la Ley Sobre Mensajes de Datos objeto de normar su eficacia probatoria cuando fueren incorporados al proceso sentido, de su artículo 6 se desprende que “...*Cuando para determinados (...) ne firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje d Firma Electrónica...*”.

Ahora bien, sobre las firmas electrónicas que deben llevar los mensajes de la referida ley especial, esta Sala de Casación Civil, en sentencia N.º 274, de fecha exp. N.º 12-594 estableció lo siguiente:

*“...Complementario a lo anterior resulta oportuno lo señalado en la respecto a que, como **aún no ha entrado en funcionamiento la Super Certificación Electrónica** servicio autónomo cuyo fin es el de acreditar proveedores de servicios de certificación públicos o privados y electrónica, los correos electrónicos o mensajes de datos, agregados actas procesales, deben ser analizados conforme a lo previsto en el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Elect*

De conformidad con el criterio anteriormente transcrito, si bien es cierto que se incorporen al procedimiento en formato de copia fotostática deben con conformidad con la ley, también es cierto que para la fecha en que se pronunció **funcionamiento la Superintendencia que certificara dichas firmas.**

Asimismo, mediante sentencia de esta Sala N.º 108 de fecha 11 de abril Cabeza Ávila, señaló:

“...la Sala observa que las copias fotostáticas o las reproducciones r mecánico (impresiones de correos electrónicos), se reputarán fide impugnadas por la contraparte, ya en la contestación a la demanda libelo va dentro de los cinco días siguientes si han sido producidos

lapso de pruebas, esto es, la no impugnación, la cual se entenderá como la falta de impugnación de la autenticidad y veracidad de su contenido...”

En consecuencia, de conformidad con lo anteriormente señalado, los correos electrónicos impugnados por la parte contra quienes se pretenden que obren, se considerarán como válidos en su contenido.

En el caso sometido a examen, esta Sala observa que el juez de la recurrida dio pleno valor probatorio al instrumento privado enviado por la parte demandada al demandante en fecha 9 de diciembre de 2011, por cuanto no fue negado por la parte demandada.

Precisamente, con base en el contenido de tal instrumento, al cual le dio pleno valor probatorio con el resto del acervo probatorio, el juez pudo establecer la existencia de un convenio entre las partes, siendo la obligación principal acordada por ellas la extinción de la relación societaria de las sociedades mercantiles Promociones Aroma C.A. y en Cima 09 C.A.

Asimismo, estableció que dicha obligación se efectuaría mediante el recibo del objeto de que el ciudadano Carlos Pini Hernández fuese el único propietario de la sociedad, y la ciudadana, Adriana Romero de Miljevic, fuese la única accionista de Promociones Aroma C.A.

En consecuencia, se observa que al dar por demostrado el consentimiento de las partes por correo electrónico referido, siendo claro que el objeto del convenio es el traspaso de las respectivas acciones y que la causa es la extinción de la relación societaria de las sociedades, que éstas se encontraban obligadas a cumplir con lo acordado en virtud de que lo acordado es la voluntad de ellas.

Finalmente, esta Sala observa que el juez no incurrió en la falta de aplicación del artículo 313, numeral 2° del Código de Procedimiento Civil, por cuanto dio pleno valor probatorio al referido correo electrónico, otorgándole pleno valor probatorio en cuanto a la plena fe que desprende y en cuanto a la fuerza de ley que tiene.

En consideración a todo lo antes expuesto, esta denuncia es improcedente.

III

De conformidad con lo previsto en el artículo 313, numeral 2° del Código de Procedimiento Civil, concordancia con el artículo 320 *eiusdem*, se denuncia la infracción, por falta de

12 de la referida norma adjetiva, al configurarse el vicio de silencio de prueba señala lo siguiente:

“...Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de concordancia con lo establecido en el artículo 320 eiusdem, denuncia de aplicación del artículo 509 en concordancia con el artículo 12 consagra la regla de establecimiento de los hechos mayormente con Principio (sic) de Exhaustividad (sic) en Materia (sic) Probatoria (sic) impone al Juez (sic) la obligación de analizar y juzgar todas las pruebas producidas, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para la formación de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del juez respectivo. Sucedió en el presente caso, incurriendo por tanto la recurrida en vicio de pruebas.

(...Omissis...)

Ahora bien, la sentencia recurrida, al momento de pronunciarse sobre las testimoniales de los ciudadanos Jorge Yvan Giraldo Oquendo Pérez, estableció expresamente lo siguiente:

‘...El testigo JORGE YVAN GIRALDO, a las preguntas formuladas al ciudadano CARLOS PINI HERNÁNDEZ. Que conoce a la ciudadana ROMERO DE MILJEVIC. Que tiene conocimiento de la relación entre el ciudadano CARLOS PINI HERNÁNDEZ y ADRIANA ROMERO, la relación comercial consiste en la comercialización de cosméticos CLINIC. Que las sociedades por medio de las cuales se comercializa son AROMA, C.A. Y CIMA que cree que tiene conocimiento. Que sabe de la separación de dichos ciudadanos más por una manera documentada. Que tiene conocimiento que el señor CARLOS PINI asumió en forma exclusiva la administración de la sociedad mercantil y hace aproximadamente cuatro años 2012, pero no sabe la fecha exacta. A las preguntas formuladas contestó: Que conoce a ambas partes aproximadamente tuvo conocimiento de dicha sociedad porque tiene una empresa a cargo de muebles y fue contactado por ambos para el montaje de Muebles Orinokia al lado de montaje de CLINIC que ya estaba montado y ellos, su empresa cuando llevó el mueble de MAC, cuando llegaron se encargaron de montar; eso fue aproximadamente en el 2012. Que en los muebles o clinic anexos en el mismo centro comercial orinokia entrevistó con ambas personas en su calidad de socios de dichas sociedades. Que meses después quedaba un saldo pendiente en el montaje de dichos muebles acudió donde el señor CARLOS PINI para el cobro de dicho saldo dividido la sociedad con la ciudadana Adriana quedando el con la ciudadana isla de margarita y que para el cobro de dicha diferencial debía de pagar Adriana que era quién había quedado con las acciones del estar en las reiteradas ocasiones comunicarse con la señora Adriana y su esposa por la diferencia y le fue imposible su ubicación por lo tanto dejó los hechos que dejó expresados.

La testigo DEYANJRA DEL CARMEN PÉREZ, a las preguntas formuladas conoce al SEÑOR CARLOS PINI y a Adriana Romero. QUE LOS DOS TIENDAS DE COSMÉTICOS DE LAS TIENDAS inversiones CIMA PORLAMAR. Que tiene conocimiento de la separación comercial para diciembre de 2012. A las repreguntas formuladas contestó que ADRIANA ROMERO solo de vista, de trato no. Que estos se se

fue cuando las firmas que fue en ORINOKIA ella trabajo en una centro de puerto Ordaz donde se reúnen todos hablar, ahí por ejem su mensajero, en conversaciones escuchadas allí, más de una vez y misma cosa de sus problemas. Que la firma fue en orinokia en mi haciendo la separación de la tienda la fecha no la sabe, el señor CIMA y la señora ADRIANA con AROMA. Que ella trabajó en z señor Eduardo oroya de 9 a 12 y de 2 a 5...’.

*Como bien pueden apreciar Ciudadanos Magistrados, de la cita observarán que la Alzada omitió absolutamente el análisis y valoración **dice absolutamente nada en torno al hecho que quedaría establecido** precisa la confianza que le merecen dichos testigos, ni mucho menos determinación, la cual simplemente no existe.*

La recurrida se limita, simplemente, a transcribir los (sic) declaraciones de testigos, pero cuando le toca hacer el propio análisis y valoración que dichas declaraciones, sencillamente lo omite.

(...Omissis...)

De haber analizado y valorado la Alzada la prueba de testigos, señalado que el supuesto ‘...convenio o acuerdo entre las partes...’ f testimonios rendidos por los ciudadanos Jorge Yvan Giraldo Oquendo Pérez. Antes bien, hubiera concluido que dichas declaraciones son r mismas no puede establecerse ningún hecho, menos aún el que fue según el cual supuestamente existe una obligación que debe se representada, por lo que este error fue determinante en el dispositivo

Para decidir la Sala observa:

En esta oportunidad, el recurrente delata que el juez de alzada sí le promovidas y evacuadas y que si bien es cierto que transcribió el contenido de la no expresó los fundamentos o la valoración que le atribuyó a cada uno de los testi

Asimismo, señala que en la decisión recurrida nada se dijo sobre los hechos las testimoniales, ni precisó la confianza que le merecieron dichos testigos, i valorado correctamente no habría ratificado la existencia del convenio.

Ahora bien, sobre el delatado vicio de silencio de prueba, es necesario configura cuando el juez deja de apreciar, bien sea de manera total o parcial algo que la menciona en su fallo, no la analiza ni valora.

De la misma manera, es necesario señalar que esta Sala de Casac referido vicio procede sólo cuando el juez omite dar criterio o mención alguna referirla sin dar alguna valoración de ésta, y agrega además, conforme a su doctrina **que tal vicio sea determinante o definitivo en el dispositivo del fallo.**

Así, dentro del marco de la infracción denunciada, se aprecia de a contentivas de las declaraciones de los testigos Jorge Yvan Giraldo y Deyanira de folios 50 al 51 de la pieza N° 2 del presente expediente, y en los folios respectivamente, cuyo contenido no resulta oportuno transcribir en virtud de que busca atacar la falta del juez al no establecer cuáles fueron los hechos supuestos pruebas ni cuál fue la valoración y el análisis de las mismas.

Ahora bien, del contenido de la decisión recurrida se observa que es siguiente (*Vid.* folios 267, 268, 272, 273 y 274, pieza 2):

“...En el capítulo II promovió las testimoniales de los ciudadanos . OQUENDO, LUIS RENATO RANAURO GUZMAN (sic) DEYANIR JUSDELBERT RAFAEL BAEZ RODRÍGUEZ, de los cuales tenemos:
El testigo JORGE YVAN GIRALDO, a las preguntas formuladas ciudadano CARLOS PINI HERNÁNDEZ. *Que conoce a la ciudadana MILJEVIC. Que tiene conocimiento de la relación comercial exist CARLOS PINI HERNÁNDEZ y ADRIANA ROMERO DE MILJ comercial consiste en la comercialización de cosméticos de la marca sociedades por medio de las cuales realizaban la referida comerciali Y CIMA que cree que tiene un número pero no lo recuerda. Que s dichos ciudadanos más no le consta si se hizo de manera a conocimiento que el señor CARLOS PINI HERNÁNDEZ asumió administración de la sociedad mercantil CIMA. Que de eso hace años 2012, pero no sabe la fecha exacta. A las repreguntas formula ambas partes aproximadamente desde hace 18 años, tuvo conocim porque tiene una empresa de carpintería de montaje de muebles y fi para el montaje de MAC en el centro comercial Orinokia al lado de m estaba montado y le expresaron que era de ellos, su empresa (sic) c MAC, cuando llegaron los muebles del exterior se encargare aproximadamente en el 2012, también hicieron unos muebles o clinic centro comercial orinokia, en ese momento se entrevistó con ambas p socios de dichas empresas. Después unos meses después quedaba i montaje de dichos muebles por lo cual acudió donde el señor CARL dicho saldo y el (sic) le notificó que había dividido la sociedad c quedando el (sic) con las acciones de cima, en la isla de margarita dicha diferencial debía dirigirse con la ciudadana Adriana que era c las acciones del estar de Puerto Ordaz, trato en reiteradas ocasic señora Adriana y su esposo por el cobro de dicha diferencia y le fu por lo tanto dejo las cosas así de allí nace todo los hechos que dejo ex*
La testigo DEYANJRA DEL CARMEN PÉREZ, a las preguntas l conoce al SEÑOR CARLOS PINI y a Adriana Romero. QUE LOS I DOS TIENDAS DE COSMÉTICOS DE LAS TIENDAS inversiones CIMA PORLAMAR. Que tiene conocimiento de la separación como diciembre de 2012. A las repreguntas formuladas contestó que ADRIANA ROMERO solo de vista, de trato no. Que estos se separan la fecha exacta no, el tiempo no se acuerda. Que el señor CARL cuando las firmas que fue en ORINOKIA ella trabajo en una tienda d

mensajero, en conversaciones escuchadas allí, más de una vez vio misma cosa de sus problemas. Que la firma fue en orinokia en mu haciendo la separación de la tienda la fecha no la sabe, el señor (CIMA y la señora ADRIANA con AROMA. Que ella trabajó en zona b Eduardo oroya de 9 a 12 y de 2 a 5..."

(...Omissis...)

En este orden de ideas las voluntades de las partes en el proceso se c mail de fecha 9 de diciembre de 2012 para la realización de un ef traspaso de las acciones de CIMA 09 C.A. para Carlos Pini y las de para Adriana Romero de Miljevic, con efecto a partir del 5 de junio de Pini, para cumplir las obligaciones a su cargo, traspasó a Adriana 8.000 acciones que poseía en Promociones Aroma (sic), debiendo rea pago establecido en función de la inversión inicial y la participaci sociedades mercantiles , y a su vez, como contraparte, Adriana Rome debía traspasar a Carlos Pini Hernández las acciones que poseía en Carlos Pini Hernández cumplió con su obligación de traspasar sus Aroma C.A., quedando pendiente el pago referido que estimó y ofre cantidad de Bs. 234.045, 27, sobre la base del inventario anexo al ci diciembre de 2012, documentos ambos, tanto el referido e-mail con mismo, que le merece plena prueba a este Juzgador (sic).

(...Omissis...)

Con relación al citado e-mail del 9 de diciembre de 2012, no controve reconocido y aceptado por ambas partes, el mismo es demostrativo de diciembre de 2012, los ciudadanos ADRIANA ROMERO DE MI HERNANDEZ (sic) asumieron respectivas obligaciones y adquiriero separación como socios comunes de las sociedades mercantiles P. C.A. y CIMA 09 C.A.

Este convenio o acuerdo entre las partes es ratificado con los testi ciudadanos JORGE GIRALDO OQUENDO (...) quien declara conoc conocimiento de la relación comercial entre ambos; que esta comercialización de las Marcas MAC y Clinique; que los ciud testimonio acordaron separarse como socios de las mencionadas em asumió en forma exclusiva la administración de Cima; que la fec aproximadamente 4 años 2012 (sic) y, al ser preguntado sobre las testimonio. (sic) manifestó que conocía a ambas partes por habe carpintería para el montaje de MAC en el C.C. Orinokia, así como e. PÉREZ (...) quien declara conocer a Carlos Pini y a Adriana Romer relación comercial entre ambos, 'eran socios de dos tiendas de costi nombre de las tiendas como Aroma Orinokia y CIMA Porlamar; c como socios de las mencionadas empresas, 'Si (sic), el señor CARLO la señora ADRIANA con PROMOCIONES AROMA', contestanc preguntas que se le formularon, que conocía a Adriana Romero de Mi trato; la fecha de separación como socios fue 'Diciembre 2012, la fe no me acuerdo (sic); acuerdo realizado '...en orinokia (sic), en mu haciendo la separación de la tienda la fecha no la se (sic), el señor CIMA y la señora ADRIANA con AROMA'.

En conclusión este sentenciador observa que la parte actora logró da de la obligación que demanda..."

Del contenido de la referida decisión se observa que, en efecto, el juez d existencia de la obligación demandada según el contenido del correo electrónico del convenio objeto de la presente demanda, con base en los hechos desprendido vale decir, le dio valor probatorio a tales deposiciones y, si bien es cierto que, p análisis de las declaraciones, lo cierto es que la configuración del vicio no dispositivo del fallo, por cuanto la existencia del convenio quedó establecida c prueba documental comentada.

En consecuencia, la Sala declara improcedente la presente denuncia por 12 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

DECISIÓN

Con fuerza en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, esta en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República B autoridad de la Ley, declara: **SIN LUGAR** el recurso extraordinario de casación, i representación judicial de la ciudadana **ADRIANA ROMERO DE MILJEVIC**, Superior Civil, Mercantil y de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripci con sede en Puerto Ordaz, dictada en fecha 4 de diciembre de 2017.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del esta Ordaz. Notifíquese al Juzgado Superior de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Su Casación Civil en Caracas, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil veir Independencia y 163° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA

El Magistrado Vicepresidente,

CARN

Secretaria,

VICTORIA DE LOS ÁNGELES VALLÉS BASAN

Exp. N° AA21-C-2018-000142
Nota: Publicado en su fecha a las

La Secretaria,

